

## RESOLUCIÓN No. 00481

### “POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECTORA DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de las facultades en especial las conferidas por la ley 99 de 1993, lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 257 de 2006, el Decreto 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, las delegadas mediante la Resolución 3074 de 2011, Decreto 1594 de 1984, el Código Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y,

### CONSIDERANDO

#### ANTECEDENTES

Que en atención al radicado No. **2009ER4865** del 4 de febrero de 2009, previa visita realizada el 10 de febrero de 2009, en espacio privado de la Calle 154 No. 94-04, de Bogotá D.C., la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Oficina de Control de Flora y Fauna de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-, profirió el **Concepto Técnico Contravencional D.E.C.S.A. No. 006352** de 20 de marzo de 2009, el cual determinó que:

*“En el parque público anexo al Conjunto Residencial Iguazú en la calle 154 A No. 94-04, se realizaron cortes transversales del fuste a dos (2) individuos arbóreos de la especie Jasmín del cabo, tres (3) Guayacanes y cuatro (4) Saucos, práctica que según el Decreto 472 del 2003, corresponde a la definición de tala.”*

Que en el referido Concepto Técnico se determinó como presunto infractor a la señora **PATRICIA ROMERO**, adicionalmente se estableció que para garantizar la persistencia del recurso forestal afectado, el presunto infractor deberá pagar la suma equivalente a un total de **15.55 IVPs** –Individuos Vegetales Plantados-; lo anterior conforme a la normativa vigente al momento de realizar la visita, esto es, Decreto Distrital 472 de 2003 y el Concepto Técnico 3675 de 2003.

Que adicionalmente, a través de la **Resolución N° 4714** del 27 de julio de 2009, el Director de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-, inició investigación y formuló cargo único a la señora **PATRICIA ROMERO MARTÍNEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.851.807 de Bogotá, en calidad de Administradora del **CONJUNTO RESIDENCIAL IGUAZU**, así:

### **RESOLUCIÓN No. 00481**

**“CARGO ÚNICO:** *Por realizar presuntamente tala sin autorización de autoridad ambiental de dos (2) individuos arbóreos de la especie Jasmín del cabo, tres (3) Guayacanes, cuatro (4) Saucos en espacio público, vulnerando con este hecho el artículo 2 y 15 numeral 1 del Decreto 472 de 2003”.*

Que el citado acto administrativo fue notificado en forma personal el 26 de mayo de 2010, a la señora **PATRICIA ROMERO MARTÍNEZ**, identificada con cédula de ciudadanía N° 51.851.807, en su calidad de Administradora del Conjunto Residencial Iguazú, con constancia de ejecutoria del 27 de mayo de la misma anualidad.

Que con radicado **N° 2010ER30889** del 3 de junio de 2010, se presentaron descargos correspondientes, dentro del término legal, los cuales se fundamentaron así:

*“Con base en la Resolución citada en la referencia, me permito realizar las siguientes precisiones:*

*Durante el proceso de poda de los individuos arbóreos localizados en zonas comunes, y realizado a finales del mes de enero de 2009, ejercía la representación legal del Conjunto Residencial Iguazú, pero me encontraba fuera del país desde Enero 1º, por lo cual a mi llegada el día 30 de enero ya se había ejecutado dicho proceso con la Administración encargada.*

*Con base en las solicitudes realizadas a la administración (E) por los propietarios de los apartamentos de los primeros pisos en los interiores 6, 7 y 8, dentro de los cuales se encuentran personas de la tercera edad y menores, manifestando el incremento de humedades en las paredes, presencia de hongos en sus muebles, desnivel del terreno, etc. Debido a los árboles ubicados internamente sobre la periferia norte del Conjunto, la Administración (E) y el Consejo de Administración decidieron realizar la poda de dichos individuos a la altura de la reja, también por el deterioro de las zonas verdes, la estabilidad de éstos debido a su altura y la afectación al cerramiento del Conjunto por los fustes, como lo muestran las fotos anexas.*

*La Administración (E) conversó con el ingeniero Carlos Augusto García del Jardín Botánico, quien se encontraba realizando una visita técnica al parque Campanella ubicado frente al Conjunto, quien le manifestó que podía realizar la poda por estar los árboles ubicados en zona privada, es decir, al interior del Conjunto, siempre y cuando no se ejecutara por debajo de 1,20 m.*

*Los árboles materia de investigación no se encuentran ubicados en ningún “parque público anexo al Conjunto Residencial Iguazú”, como lo enuncia el Concepto Técnico No. 006352 de Marzo 20 de 2009, sino que se encuentran*

### **RESOLUCIÓN No. 00481**

*bordeando la periferia norte del Conjunto dentro del cerramiento, como lo muestran las fotos anexas.*

*Con el fin de mantener la estabilidad y vida de los individuos podados, el día 14 de febrero de 2009 ya está Administración contrató los servicios del señor Pablo Antonio Mendoza, para mejorar el corte transversal a los fustes, aplicar cicatrizante hormonal, fumigación y abonado, con el fin de prevenir posibles daños.*

*(...)*”

Que una vez revisado el expediente **SDA-08-2009-984**, se encontró que no existe actuación posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación a proceder.

### **CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución Nacional, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Que el numeral 8º del canon 95 de la misma Carta, establecen como obligación de los particulares, proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, contempla lo relacionado con las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando entre ellas: “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales (...)”, concordante con el artículo 65 que establece las atribuciones para el Distrito Capital.

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, señaló las competencias de los grandes centros urbanos de la siguiente manera: “*Artículo 66. Competencias de Grandes Centros Urbanos. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales,*

### **RESOLUCIÓN No. 00481**

*en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.”, quedando así en cabeza de ésta Autoridad Ambiental.*

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que adicionalmente, dentro de las garantías constitucionales del debido proceso sancionador, cobran especial importancia los principios de igualdad, celeridad y caducidad de la acción, que imponen a la administración, el deber de actuar diligentemente y preservar las garantías de quienes resultan investigados; es así como, la caducidad tiene por objeto, fijar un límite en el tiempo para el ejercicio de ciertas acciones, en protección de la seguridad jurídica y el interés general.

Que el procedimiento administrativo acogido dentro del presente acto administrativo, será el alusivo al Decreto 01 de 1.984, de conformidad a lo señalado en el “**Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. (...) Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.**” (Negrilla fuera del texto original)” de la Ley 1437 de 2011.

Que en relación con la actuación ambiental de carácter sancionatorio surtida dentro del expediente **SDA-08-2009-984**, en contra del **CONJUNTO RESIDENCIAL IGUAZÚ**, a través de la señora **PATRICIA ROMERO MARTÍNEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 51.851.807, en calidad de Administradora o por quien haga sus veces, esta Autoridad Ambiental considera pertinente señalar que para la fecha de verificación del presunto hecho infractor, esto es **10 de febrero de 2009**, se encontraban vigentes como principales normas sustanciales en materia ambiental silvicultural la Ley 99 de 1993 y el Decreto 472 de 2003.

### RESOLUCIÓN No. 00481

Que en materia procedimental, y teniendo en cuenta los mismos hechos, sería aplicable el Decreto 1594 de 1984, el cual definía el proceso sancionatorio en sus artículos 197 y siguientes; no obstante, dicho régimen no contenía la figura de la caducidad administrativa, razón por la cual y frente al vacío de la norma, lo procedente era la remisión a lo previsto por las disposiciones del entonces Código Contencioso Administrativo.

Que teniendo en cuenta que la figura de la Caducidad de la facultad sancionatoria, está establecida por la Ley y ha sido de aplicación en el Derecho Colombiano siendo su antecedente más inmediato el artículo 38 del Decreto 01 de 1984 (antiguo Código Contencioso Administrativo), precedente de lo establecido en el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 en su artículo 52; ampliamente estudiada y analizada a través de diferentes manifestaciones jurisprudenciales, entre las cuales se evidencia lo manifestado por el H. Consejo de Estado, quien en reiteración a su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, precisó: “(...) *Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, **por lo tanto el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor (...)***” (Subraya y negrita fuera del texto original)

Que respecto al término establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

*“(...) Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: “ (...) Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, **se recomienda a las entidades Distritales que adelanten***

### **RESOLUCIÓN No. 00481**

actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa<sup>6</sup>(...)” (Subrayado fuera de texto).

Que teniendo en cuenta que, respecto de la caducidad tanto en lo legal como en lo jurisprudencial salvo la norma aplicable, la figura sigue conservando su esencia y el término para su aplicación, y atendiendo a que la presunta conducta conocida por esta Autoridad Ambiental tuvo lugar estando vigentes las normas mencionadas, cabe para este caso la aplicación de la Caducidad de la facultad sancionatoria prevista por el artículo 38 del **Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984-**, el cual a su tenor literal prevé:

*“Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado (...).”*

Que así las cosas, se deduce que la administración, para el caso en concreto, disponía de un término de 3 años contados a partir de la fecha en que conoció los hechos que dieron origen a la presente actuación esto es, desde el **10 de febrero de 2009**, fecha en la cual esta entidad verificó la ocurrencia de los hechos a través de visita técnica, para la expedición del acto administrativo que decidiera de fondo, su notificación y debida ejecutoria, trámite que no se surtió, teniendo como fecha límite para ello el **10 de febrero de 2012**, por lo anterior se tiene como fecha en la cual operó el fenómeno de la caducidad el día **11 de febrero de 2012**.

Que, siendo la caducidad, una institución de orden público, a través de la cual el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda, que su declaración proceda de oficio, por cuanto, al continuar el proceso, este culminaría con un acto viciado de nulidad, por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite.

En igual sentido, el Doctrinante Luis Alfonso Acevedo Prada, en su obra *“Caducidad, Prescripción, Perención, Preclusión y Términos” Primera edición 2004*, expresó al respecto de la caducidad lo siguiente: *(...) Ahora bien, en la caducidad ocurre que proceden sus efectos ope legis o de pleno derecho, sin necesidad de que el interesado*

### RESOLUCIÓN No. 00481

*en beneficio de sus efectos la alegue o proponga como defensa exceptiva. **El funcionario competente en el juzgamiento pertinente, no solo debe sino que está obligado a declararla sin necesidad de petición de parte*** (...) Negrillas fuera de texto.

Que a su vez en el segundo párrafo del artículo tercero, Principios del **Código Contencioso Administrativo**, del Título I Procedimiento Administrativo, prevé: “*Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad*”.

Que para complementar debemos mencionar el artículo 267 del **Código Contencioso Administrativo**, el cual preceptúa:

“En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.”.

Que descendiendo al caso *sub examine*, encontramos como norma que nos permite integrar a la práctica la labor jurídica a realizar, bajo el amparo del Artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, en el que se dispone: “*Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario*”.

Que con el ánimo de impulsar el presente proceso, y de conformidad con los argumentos y análisis jurídicos, jurisprudenciales y doctrinales que anteceden, esta Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-, considera pertinente declarar la caducidad de la facultad sancionatoria que tenía ésta Autoridad Ambiental para manifestarse respecto de los hechos conocidos y por consiguiente el archivo definitivo de las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2009-984**, pues de conformidad con las decisiones a tomar no existiría actuación administrativa adicional a seguir.

Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente -DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, a la que se le asignó entre otras funciones, la de ejecutar el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales e implementar las

### **RESOLUCIÓN No. 00481**

acciones de policía que sean pertinentes a efecto y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que corresponda a quién infrinja dichas normas.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio del cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Resolución No. 3074 del 26 de mayo de 2011, la cual establece que se delega al Director de Control Ambiental la expedición de los Actos Administrativos que decidan directamente el fondo de las actuaciones administrativas de Competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.

En mérito de lo expuesto,

### **RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria respecto de los hechos acaecidos en espacio privado de la Calle 154 No. 94-04, de Bogotá D.C., de los cuales tuviera conocimiento ésta Autoridad Ambiental el 10 de febrero de 2009 y que constan en las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2009-984**, a nombre del **CONJUNTO RESIDENCIAL IGUAZÚ** a través de la señora **PATRICIA ROMERO MARTÍNEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 51.851.807, en calidad de Administradora o por quien haga sus veces, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de la presente providencia.

**ARTICULO SEGUNDO:** Ordenar el **ARCHIVO** de las diligencias sancionatorias contenidas en el expediente No. **SDA-08-2009-984**, como consecuencia de la decisión contenida en el artículo anterior, y teniendo en cuenta lo estipulado en la parte motiva de la presente providencia.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar la presente providencia al **CONJUNTO RESIDENCIAL IGUAZÚ** a través de la señora **PATRICIA ROMERO MARTÍNEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 51.851.807, en calidad de Administradora o por quien haga sus veces, en la Calle 154 No. 94-04, de Bogotá D.C.,

**ARTÍCULO CUARTO:** Comunicar el contenido de la presente providencia a la Subsecretaría General y de Control Disciplinario, así como a la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-, para lo de su competencia.



**RESOLUCIÓN No. 00481**

**ARTÍCULO QUINTO:** Publicar la presente providencia en el boletín que para el efecto disponga la entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO SEXTO:** Contra la presente providencia procede recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

**NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**Dado en Bogotá a los 28 días del mes de abril del 2015**



**ANDREA CORTES SALAZAR**  
**DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

**Elaboró:**

Jorge Alberto Doria Quintero	C.C: 80769495	T.P: 198935 C.S.J	CPS: CONTRATO 047 DE 2015	FECHA EJECUCION:	2/02/2015
------------------------------	---------------	-------------------	---------------------------	------------------	-----------

**Revisó:**

Teresita de Jesus Palacio Jimenez	C.C: 36725440	T.P: 167351	CPS: CONTRATO 169 DE 2014	FECHA EJECUCION:	9/04/2015
-----------------------------------	---------------	-------------	---------------------------	------------------	-----------

Alcy Juvenal Pinedo Castro	C.C: 80230339	T.P: 172494 C.S.J	CPS: CONTRATO 1079 DE 2015	FECHA EJECUCION:	3/02/2015
----------------------------	---------------	-------------------	----------------------------	------------------	-----------

Janet Roa Acosta	C.C: 41775092	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 637 DE 2015	FECHA EJECUCION:	4/03/2015
------------------	---------------	----------	---------------------------	------------------	-----------

ANDREA CORTES SALAZAR	C.C: 52528242	T.P:	CPS:	FECHA EJECUCION:	28/04/2015
-----------------------	---------------	------	------	------------------	------------

**Aprobó:**

ANDREA CORTES SALAZAR	C.C: 52528242	T.P:	CPS:	FECHA EJECUCION:	28/04/2015
-----------------------	---------------	------	------	------------------	------------